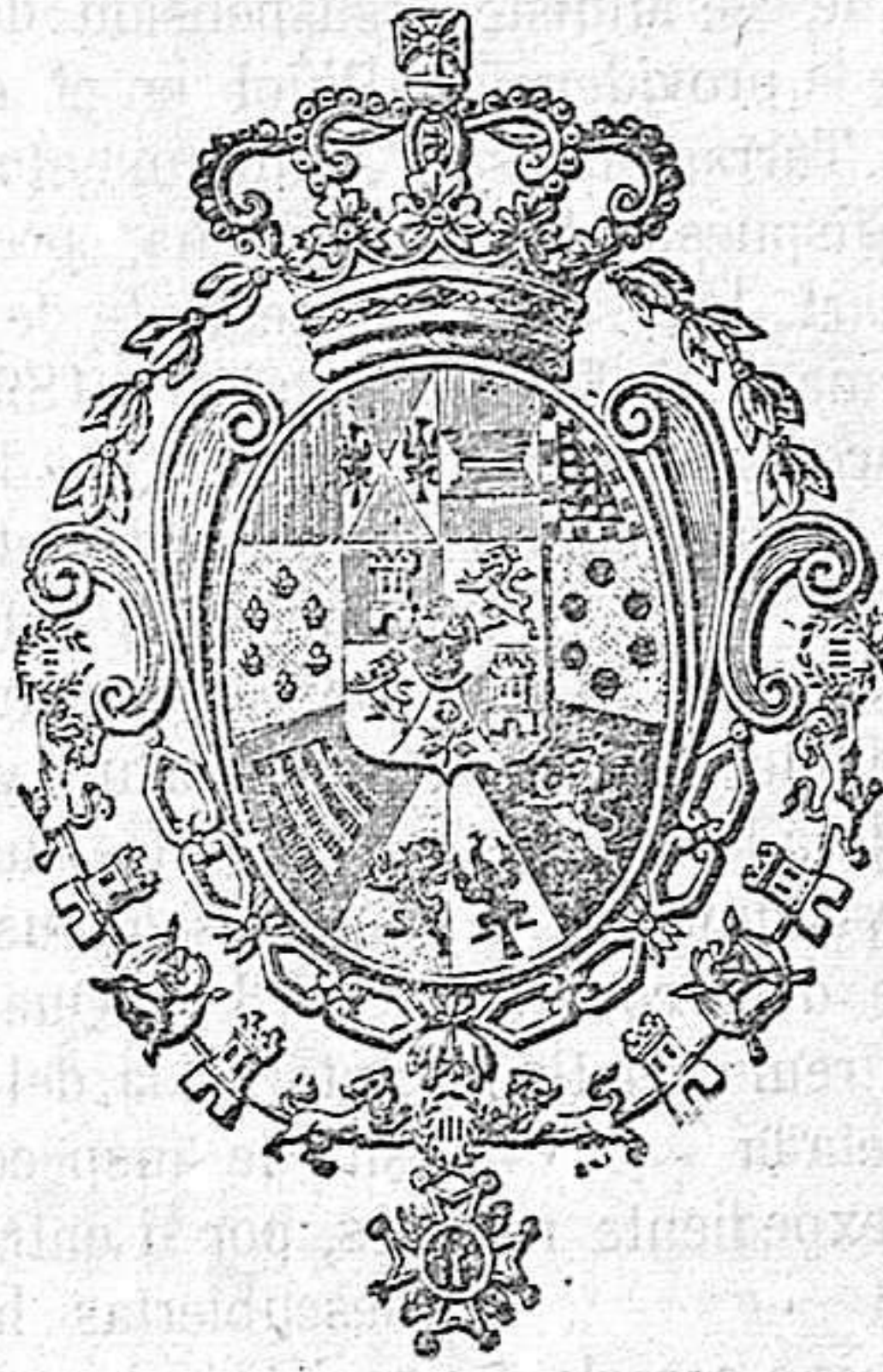


CONDICION VEINTIDOS
DE LA SUBASTA

Por la inserción de edictos y anuncios oficiales que sean de pago, se satisfará por cada línea 25 céntimos de peseta, haciéndose la inserción precisamente en el tipo de letra que señala la condición 19.



PRECIO DE SUSCRIPCION

	Pesetas
Un año dentro y fuera de la capital.	10
Un semestre id. id.	6
Un trimestre id. id.	4
Números sueltos.	0'25

Se publica todos los dias excepto los domingos.

BOLETIN OFICIAL

DE LA PROVINCIA DE ORENSE

ADVERTENCIA.—Las leyes obligarán en la Península, islas adyacentes, Canarias y territorios de Africa sujetos á la legislación peninsular, á los veinte dias de su promulgación, si en ellas no se dispusiere otra cosa. Se entiende hecha la promulgación el dia en que termine la inserción de la ley en la *Gaceta*. (Artículo 1º del Código civil.)

PARTE OFICIAL

PRESIDENCIA
DEL CONSEJO DE MINISTROS

SS. MM. el Rey, la Reina Regente (q. D. g.) y Augusta Real Familia, salieron el 10 de Cádiz á la Rábida, donde desembarcaron, dirigiéndose despues á Huelva, y continuando en esta última capital sin novedad en su importante salud.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION
REALES ORDENES

Pasado á informe la Seccion de Gobernacion y Fomento del Consejo de Estado el expediente relativo á la suspension del Alcalde y cuatro Concejales del Ayuntamiento de Altafulla, que fué decretada por V. S. en 13 de Agosto último, dicho alto Cuerpo ha emitido con fecha 26 del mismo el siguiente dictamen:

«Excmo. Sr: En cumplimiento de Real orden comunicada por el Ministerio del digno cargo de V. E. la Seccion ha examinado con la urgencia que se le recomendó el expediente relativo á la suspension del Alcalde y cuatro Concejales del Ayuntamiento de Altafulla, decretada en 13 del actual por el Gobernador civil de la provincia de Tarragona, en vista del resultado de la visita de inspeccion girada á la Administracion del citado Municipio por un Delegado de la Autoridad.

De las actas de la visita, certificaciones del Secretario del Ayuntamiento y Memoria de este funcionario, resulta que sin previa convocatoria de la Corporacion y, por consiguiente, faltando á lo que dis-

pone el art 41 del reglamento de procedimiento administrativo de ese Ministerio de 22 de Abril de 1890, empezó la visita por un arqueo de los fondos que existían en la Caja del citado Ayuntamiento, del que apareció una existencia en 30 de Junio último de 23 pesetas 76 céntimos, que obraba en poder del Depositario, por no existir Caja que se vienen cobrando ciertos derechos por cada carga de vino que entraba en la poblacion para el consumo público, sin que estuviera consignado en presupuesto; que se han cambiado varias veces los dias de sesion para celebrar las ordinarias, sin que, según hace constar el Secretario, se hayan publicado estos acuerdos; que todas las actas correspondientes al segundo semestre del año natural de 1891 se encuentran sin sellar, foliar ni rubricar, y sin sellar las del corriente año, por no estar el sello de la Corporacion en la Secretaria, sino en poder del Alcalde, que lo guarda en su casa por no merecerle confianza el Secretario; que se han sustraído documentos de la Secretaria; que algunas actas están sin reintegrar, á consecuencia de que la Secretaria carece, no solo de papel sellado y sellos correspondientes para el despacho, sino hasta de lo mas indispensable de material para la confeccion de documentos, por retener en su poder el Alcalde la consignacion destinada á estos servicios; que en el Archivo municipal no existe inventario de ninguna especie de los censos y láminas ó inscripciones intransferibles que posee, así como tampoco de las demás fincas y bienes del Municipio; que el presupuesto para 1891-92 fué votado y aprobado en 10 de Julio de 1891, y autorizado por la Superioridad en 11 de Agosto siguiente; que el reparto de liquidados del ejercicio próximo pasado

carece de las diligencias de publicacion y exposicion al público que previene el repetido reglamento, que la subasta para el arbitrio municipal sobre carnes lanares celebrada el 22 de Junio del corriente año no fué anunciada en el *Boletín oficial* de la provincia, ni se hizo el depósito preventivo del 5 por 100 que previene el Real decreto de 3 de Enero de 1883 para tomar parte en ella, ni se ha hecho por el arrendatario efectiva todavia la fianza exigida de remate por el pliego de condiciones, ni, por último, el acta se ha aprobado por el Ayuntamiento; que no se han acordado las debidas distribuciones mensuales y trimestrales de fondos; que al ser repuesto en 20 de Enero último el Secretario, observó que los libros borradores de ingresos y gastos de la Contaduría del citado Ayuntamiento correspondientes á los ejercicios de 1889-90 y 1890-91, habían sido sustituidos ó reemplazados por otros, en los que han dejado de consignarse algunas partidas; que se han realizado varios pagos sin existir acuerdos del Ayuntamiento que los autorizasen; que el recaudador no rinde las liquidaciones en las épocas prevenidas, y que, habiéndole formado una liquidacion de oficio, el Alcalde y mayoría aprobó otra liquidacion posterior sin justificar la que presentó aquél, de la que resulta debe mucho menos de lo que aparece en la primera, sin que se prueben las causas de la diferencia; que la Junta nombrada para administrar el cementerio no rinde cuentas á la Corporacion de lo que recauda y gastos en el mismo, y, por último, que al Alcalde del Ayuntamiento de que se trata, en 11 de Enero último se le declaró por el Gobernador incurso en la multa de 100 pesetas; en 16 siguiente se le conminó con la de

500, y en 20 del mismo mes se le ordenó hiciera efectiva la multa de 100 pesetas con que había sido conminado en 11 anterior por haber insistido en desobediencia á los mandatos de la citada Autoridad.

Convocada la Corporacion municipal una vez terminada la visita á sesion extraordinaria, en cumplimiento á lo que ordena el art. 41 del reglamento provisional de procedimiento administrativo de ese Ministerio, se expuso por su Alcalde, como descargo de los que aparecen de la misma: que los fondos del Ayuntamiento los guarda el Depositario nombrado porque la Casa Consistorial no ofrece seguridades para guardarlos, y la persona que funciona como Depositario les merece entera confianza y tiene intereses bastantes á responder; que si se han cobrado algunos arbitrios sobre los vendedores ambulantes y por pesas y medidas, no tiene de ello conocimiento la Alcaldía, pues si el Alguacil recauda algunos céntimos por aquéllos conceptos, es como un emolumento que cobra por razon de su cargo, lo cual viene practicándose desde tiempo inmemorial; que la Junta nombrada para la administracion del cementerio está dispuesta á rendir cuentas á todas horas, pues que se ha gastado mucho mas de lo que se ha recaudado; que si la Corporacion anuló su primitivo acuerdo en cuanto á la liquidacion practicada por un comisionado de oficio, fué porque la Corporacion comprendió que en los plazos que se le señalaron no tenía el Recaudador tiempo material de formar la liquidacion pedida, aparte de que aquél acuerdo no tenía validez, pues aunque el acta de la sesion siguiente diga que fué leída y aprobada la del anterior, esta afirmacion no puede achacarse mas que á un error del Secretario habilitado

que la redactó; que con respecto al débito que resultó contra el Recaudador en la liquidación de oficio, no puede prosperar, pues se le cargaron en ella repartos que ni siquiera se habían confeccionado por no haber ido la autorización, y además, el Recaudador tenía en su poder las cartas de pago de los ingresos al Tesoro, que tampoco se habían tenido en cuenta; que el pliego de condiciones y la subasta para el arriendo de las carnes estaba acordado por el Ayuntamiento, y si alguien estuviera agraviado por el acuerdo, podía utilizar el recurso de reforma ó alzada; y que el Ayuntamiento hace muchos años no acuerda distribución mensual de fondos por la poca importancia del presupuesto.

En vista de lo anteriormente expuesto y de lo consignado por el Delegado en la Memoria que, una vez terminada la visita, elevó al Gobernador, esta Autoridad, por providencia de 13 del actual, decretó la suspensión en sus cargos del Alcalde y Concejales del Ayuntamiento de que se trata, D. José Pujol, D. José Marca, D. Juan Rumbau, D. Pedro Ramon Fortuni y D. Juan Garcia Torrellas, que son los que constituyen la mayoría de la citada Corporación municipal, contra los que resultan las responsabilidades deducidas del expediente, sustituyéndolos con unos interinos; que se practique una escrupulosa revisión, con justificantes á la vista, de la liquidación presentada por el Recaudador D. José Rovira; declarar la nulidad de la subasta del arbitrio de matanza de reses para el corriente ejercicio, procediéndose desde luego á otra nueva con sujeción á los preceptos que establece el Real decreto de 4 de Enero de 1883; que la Junta nombrada de cementerio rinda ante el Ayuntamiento, las cuentas justificadas de su gestión, y por último, que se remitan los antecedentes al Presidente de la Audiencia de lo criminal de aquella ciudad, á los efectos que en justicia correspondan. Funda este acuerdo en que los Concejales propietarios D. Juan Rovira Solana y D. José Boronat, hoy suspensos por procesamiento, han declinado la responsabilidad que pudiera alcanzarles, según aparece de las actas de sesiones del Ayuntamiento, y que á los interinos Don Salvador Rumbau y D. Domingo Canelas tampoco les alcanza responsabilidad alguna; en que el Alcalde y mayoría del citado Ayuntamiento han incurrido en grave responsabilidad en el orden administrativo; en que también han incurrido, al parecer, en los delitos de exacciones ilegales y malversación de caudales públicos, así como en el de infidelidad en la custodia de documentos; y por último, en que con anterioridad ha sido apercibido y multado por su falta de cumplimiento en los servicios encomendados á su gestión.

La Subsecretaría de ese Ministerio, entendiendo que la providencia del Gobernador de Tarragona se halla ajustada á lo dispuesto en el último párrafo del art. 189 de la ley Municipal, informa á V. E. en el sentido de que procede confirmar en todas sus partes la providencia referida.

Con Real orden, fecha 20 del presente mes, se remite el expediente á este Consejo á los efectos del art. 191 de la ley Municipal, lo cual quiere decir que debe concretar su informe al extremo relativo á la suspensión decretada.

Visto cuanto del expediente resulta:

Considerando que con arreglo á lo que dispone el art. 189 de la vigente ley Municipal, los Gobernadores de las provincias pueden suspender á los Alcaldes y Tenientes por causa grave, dando cuenta al Gobierno en el término de ocho días, cuyo Ministro de la Gobernación, en el de sesenta, alzará la suspensión ó instruirá, oyendo al interesado, expediente de separación, que será resuelto en Consejo de Ministros:

Considerando que con arreglo á los párrafos segundo y tercero del citado artículo y jurisprudencia establecida, los Concejales, ya colectiva ó individualmente, no pueden ser suspendidos mas que en los casos de extralimitación grave con carácter político, acompañada de alguna de las circunstancias que el primero de los citados párrafos menciona, ó desobediencia grave en que hubieran insistido después de haber sido apercibidos y multados:

Considerando que de certificación que obra en el expediente, expedida por el Secretario del Gobierno de la provincia, se desprende que no se ha impuesto á los Concejales del actual Ayuntamiento corrección ninguna, sino única y exclusivamente al Alcalde:

Considerando que no aparece que los Concejales de que se trata hayan cometido extralimitación ninguna grave con carácter político, desobediencia grave, ni que hayan sido apercibidos ni multados:

Considerando que de la visita girada á la Administración municipal de Alfulla resultan faltas y abusos de verdadera gravedad:

Considerando que en la instrucción del expediente se ha faltado á lo dispuesto por los artículos 40 y 41 del reglamento provisional de procedimiento administrativo de ese Ministerio, de 22 de Abril de 1890, una vez que dejó de convocarse á la Corporación municipal á sesión extraordinaria antes de comenzar la visita de inspección, y á demás ha dejado de acompañarse al mismo la lista nominal de los Concejales interinamente nombrados, con expresión de la elección de que proceden;

La Sección opina:

1.º Que debe confirmarse la

suspensión decretada de D. José Pujol en el cargo de Alcalde del Ayuntamiento de Alfulla, que desempeña, procediendo se instruya expediente de separación con arreglo al art. 189 de la ley Municipal.

2.º Que debe revocarse la suspensión decretada de los Concejales Don José Pujol, D. José Marca, Don Juan Rumbau, D. Pedro Ramon Fortuni y D. Juan Garcia Torrellas, los cuales deberán ser re- puestos en sus cargos.

Y 3.º Que debe pasarse copia autorizada del expediente de la visita de inspección á los Tribunales, por si entre los abusos y faltas descubiertas hubiere alguna que revisiera los caracteres de delito.»

Y conformándose S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, con el preinserto dictamen, se ha servido resolver como en el mismo se propone.

De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y demás efectos, con devolución del expediente. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 16 de Septiembre de 1892.

—Villaverde.—Sr. Gobernador de Tarragona.

(G. núm. 263)

Pasado á informe de la Sección de Gobernación y Fomento del Consejo de Estado el expediente relativo á la consulta hecha por ese Gobierno sobre división de distritos electorales para las elecciones provinciales, dicho alto Cuerpo ha emitido, con fecha 26 de Julio último, el siguiente dictamen:

«Excmo. Sr.: En comunicación de 13 del actual manifiesta á V. E. el Gobernador de Navarra que, sendo cinco los partidos judiciales de la provincia, elige, sin embargo, siete Diputados provinciales, según los artículos 8.º y 9.º de la ley de modificación de fueros, á saber: dos el partido de Pamplona; dos el de Estella, y uno los restantes partidos de Aoiz, Tafalla y Tudela:

Que hasta la publicación de la ley Provincial de 1870, los dos primeros partidos citados eligieron sus dos Diputados sin dividirse en otros tantos distritos; pero como el art. 17 de la misma ley determinó que cada provincia se dividiera en tantos distritos como Diputados, correspondieron á Navarra siete distritos:

Que como consecuencia de lo establecido en la ley Provincial vigente, se publicó el Real decreto de 31 de Agosto de 1882, que prescribía expresamente que Navarra se dividiera en cinco distritos, por partidos judiciales, correspondiendo, por tanto, á los de Pamplona y Estella elegir, como resultado de dicha división, dos Diputados por cada uno de ellos, y uno á los otros tres partidos ó distritos, conforme al procedimiento electoral que rige, y hoy al Real decreto de adaptación aplicable al caso, según el artículo 9.º de la ley de modificación de fueros.

Que apesar de estas disposiciones, por error padecido por el Gobierno civil, en 1882 fueron convocadas las elecciones provinciales con arreglo á los procedimientos establecidos en la ley de 1870 y á la división que establecía el Real decreto de 1871, disposiciones ambas derogadas ya; y aun que en parte se subsanó el error por lo que respecta á la ley electoral, no así en lo relativo á la división de distritos, verificándose las elecciones con

la división de siete, siendo así que debieran haberse hecho con la de cinco:

Que en las renovaciones bienales de 1884 y sucesivas se ha seguido igual procedimiento, y aunque de ello se recurrió por algunos á la Audiencia en 1886 contra la aprobación de las actas del partido de Estella, declaró dicho Tribunal que no le correspondía conocer de una alzada que no se refería á asunto que la Diputación pudiera resolver en primer término, en razón á que de la convocatoria hecha por el Gobernador pudieron los electores recurrir en tiempo ante V. E., y no habiéndolo hecho, quedó firme aquella elección, sin que respecto de las posteriores se recurriera tampoco por ningún elector ó interesado, quizás por desconocimiento de los fundamentos de la sentencia y de las disposiciones legales, ó ya por indiferencia ó cansancio:

Que en vista de todo y en razón á que en breve deberá el Gobernador convocar á elecciones, somete el asunto á la resolución que V. E. estime aceptado ó no; determinándose por Real orden de 19 de Julio corriente que esta Sección emita con urgencia el informe que á su juicio corresponda:

Prescindiendo de las disposiciones anteriores á la vigente ley Provincial, y ateniéndose la Sección á lo determinado en esta última, y muy en particular á lo establecido en el Real decreto de 31 de Agosto de 1882, entiendo que en las elecciones provinciales que han tenido lugar en Navarra después de la publicación de aquella en los distritos de Pamplona y Estella, se ha padecido un error, quizás de buena fe, puesto que se han verificado en siete distritos, siendo así que con arreglo á las disposiciones citadas han debido hacerse con sólo cinco, ya que este es el número de sus partidos judiciales, si bien hay que tener en cuenta la ley de privilegio de que disfruta dicha provincia, y por virtud de la cual se eligió siete Diputados, cuando con arreglo á la ley general debieran elegirse 20.

Pero ya haya sido cometido el error por las Autoridades que han venido gobernando la provincia, ó ya haya sido efecto de una inveterada costumbre en la misma, es lo cierto que Pamplona y Estella venían eligiendo cuatro Diputados en otros tantos distritos según queda ya dicho, cuando solo debían elegirse aquellos en los dos de los nombres referidos, y esto hace que exista en la mencionada provincia un estado anormal de derecho que es preciso restablecer; siendo de lamentar que, no obstante el manifiesto error en que ha venido viviendo la provincia durante tan largo tiempo en cuanto á la elección de sus representantes en la mencionada Corporación, no haya sido jamás denunciado al Gobierno de S. M. por ninguno de sus miembros, por ninguno elector ó interesado ni siquiera tampoco por ninguno de sus Gobernadores, excepción hecha del que en la actualidad desempeña dicho cargo.

Pero el restablecimiento del derecho perturbado no deba alcanzar más que á los distritos de Pamplona y Estella, una vez que respecto á los de Aoiz, Tafalla y Tudela, han venido ateniéndose estrictamente á las leyes en cuanto á la elección de sus representantes, y en nada puede afectarles el error padecido, debido todo quizás á la circunstancia de no elegirse más que un Diputado en cada uno de ellos, y ya que la próxima renovación no podrá menos de hacerse con arreglo al turno correspondiente establecido para la misma.

Mas por lo que respecta á los referidos distritos de Pamplona y Estella, cree la Sección que atendiendo á la

ilegal situación en que se hallan los Diputados elegidos por los dos distritos en que cada uno de ellos se halla dividido, debe procederse seguidamente, dada la urgencia del caso, á reunirse aquéllos en los dos que determina el Real decreto citado de 31 de Agosto de 1882, y hacerse en los mismos, en el próximo mes de Septiembre, la elección total de los Diputados que les corresponda.

Por virtud, pues, de lo expuesto, la Sección opina:

1.º Que deben reducirse á los cinco distritos electorales que determina el Real decreto de 31 de Agosto de 1882, los siete en que vienen haciéndose las elecciones provinciales en Navarra.

2.º Que á fin de subsanar el error padecido en los dos distritos de Pamplona y Estella, debe procederse á la elección total de los cuatro Diputados que corresponden.

Y 3.º Que respecto de los distritos Aoiz, Tafalla y Tudela, no cabe hacer declaración alguna, una vez que no puede afectarles el error cometido, debiendo limitarse solamente á hacer la renovación de Diputados que corresponda.

Visto:

Considerando que de haberse adoptado desde luego una resolución en armonía con lo informado por la Sección de Gobernación y Fomento del Consejo de Estado en el dictamen que precede, cuya fecha es la de 26 de Julio de este año, hubiese sido indispensable practicar operaciones previas para cuyos plazos y realización no había tiempo suficiente, dado que, con arreglo á los preceptos de la ley orgánica Provincial, las elecciones para la renovación bienal debían verificarse en la primera quincena del mes de Septiembre, como ha sucedido:

Considerando que si bien desde el año de 1882 hasta la fecha se han venido verificando en Navarra las elecciones bienales para la renovación de su Diputación provincial de manera anormal en lo relativo á la división de distritos, á pesar de lo cual no tiene conocimiento el Gobierno de que, antes ni ahora, haya protestado nadie de la expresada anomalía, que debe naturalmente corregirse en la forma que menor perturbación produzca;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer tenga lugar la división de distritos electorales, de acuerdo en un todo con lo informado por la Sección de Gobernación y Fomento del Consejo de Estado en el dictamen que antecede; pero entendiéndose que las disposiciones que según el mismo deben adoptarse, tendrán aplicación á las primeras elecciones provinciales que se celebren en Navarra, á cuyo fin, tanto V. S. como la Diputación de aquella provincia, procederán desde luego á practicar las operaciones necesarias para que esta disposición tenga cumplido efecto.

De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 29 de Septiembre de 1892.—Villaverde.—Sr. Gobernador civil de Navarra.

(G. núm. 274.)

MINISTERIO DE FOMENTO

EXPOSICION

Señora: La asociación general de Ganaderos, descendiente del antiguo Concejo de la Mesta, pero sin privilegios incompatibles con las modernas instituciones, es, sin embargo, en Europa la única Corporación que ejerce con cierta independencia y gratuitamente, por delegación del Gobierno,

atribuciones administrativas en uno de los más importantes ramos de riqueza pública. Mirada en su origen con gran recelo por los recuerdos que despertaba de su antecesor el honrado Concejo, fué suprimida en 4 de Septiembre de 1838 y agregado el servicio de cañadas á la Superintendencia general de Caminos; pero notándose bien pronto lo difícil y costoso que era atender por el Estado á la conservación de aquellas vías, de existencia necesaria, fué restablecida en 27 de Junio de 1839, á virtud de consulta del Tribunal Supremo de Justicia.

Desde aquella época, la Asociación general ha venido acomodando su organización á las necesidades de los tiempos, y los diversos Gobiernos que se han sucedido de medio siglo á esta parte la han ayudado, cuanto ha sido preciso, en su tarea protectora.

Dos veces han sido ya reformados sus estatutos por el reglamento de 31 de Marzo de 1854 y por el Real decreto de 3 de Marzo de 1877.

Por el primero se legalizó su modo de ser, condensando en su articulado lo sustancial de las diferentes Reales órdenes publicadas sobre las facultades de sus funcionarios; y por el segundo, en cuya fecha la Asociación no inspiraba ya á clase ninguna odio ni temores, se ensanchó su esfera de acción y se fijó la tramitación de los expedientes de deslinde de las vías pecuarias, á fin de evitar la arbitrariedad de los que deben intervenir en ellos, encomendándole la importante misión de vigilar la fiel observancia de las leyes y disposiciones gubernativas concernientes al ramo de ganadería, principalmente las relativas á la conservación de los caminos pastoriles y demás servidumbres pecuarias. La Administración logró durante un cuarto de siglo que fuesen bastante respetadas, aunque nunca lo suficiente, las vías pecuarias; pero poco á poco, por causas diversas, los terratenientes colindantes han ido roturándolas, habiendo perdido el citado Real decreto y el reglamento publicado para su ejecución la eficacia necesaria para evitar el abuso.

A dos causas se debe principalmente este lamentable estado de cosas: la de que dirijan los deslinde de toda clase de vías las Autoridades municipales; y la falta de sanción penal clara y bien definida, para los contraventores. Sobre estos dos puntos versa especialmente la reforma que se propone en los proyectos de decreto y reglamento que el Ministro que suscribe tiene el honor de someter á la aprobación de V. M.

En ellas se establece la distinción debida entre las vías pecuarias de carácter general y las de carácter local, encomendando solo el deslinde de éstas á los Alcaldes y confiriendo el de conservar las generales á funcionarios nombrados por los Gobernadores, disposición que está conforme con la práctica generalmente seguida, reduciéndose, por lo tanto, la reforma á sancionar el hecho y convertir la excepción en regla.

Frecuente ha sido hasta ahora que después de restablecer las vías pecuarias en su dirección y anchura legal, los usurpadores y roturadores reincidan pretextando no conocer sus lindes, siendo cierto que nunca se han señalado de modo visible y permanente.

En el proyecto que se acompaña se subsana esta omisión haciendo obligatorio el amojonamiento de aquéllas á la Asociación general de Ganaderos de cuenta de la cual serán los gastos que origine la operación en las ya deslindadas y corrientes.

La falta de sanción penal contra los usurpadores de las vías pecuarias ha

sido otra de las causas que más han contribuido á que sean pocas las que conservan su anchura legal; pues si bien no faltan en la legislación penal artículos que puedan ser aplicados á las faltas cometidas contra las vías pecuarias y es también evidente que las Autoridades tienen suficientes medios para hacerse obedecer, la duda acerca de la pena correspondiente á la falta cometida y de los trámites que se han de seguir para hacerla efectiva, por no estar taxativamente expresados en la legislación del ramo, es causa de que de hecho no haya castigo para los detentadores.

El Ministro que suscribe no considera necesario crear una penalidad especial contra los intrusos en las vías pecuarias, limitándose á aplicar en lo posible la establecida en las Ordenanzas de Montes del Estado, reformadas por Real decreto de 3 de Septiembre de 1884, por la gran analogía que existe en cuanto al dominio, aunque no en cuanto al uso entre aquéllas y éstas.

Conveniente ha parecido también consignar la imprescriptibilidad de las vías y servidumbres pecuarias, expresamente establecida en nuestra legislación, desde el Código de las Partidas hasta el Civil vigente, para evitar, en beneficio del Estado, las dificultades que presentan los roturadores de mala fe, pretextando la posesión de año y día.

Tales son las principales variaciones que se proponen en los estatutos y reglamento de la Asociación general de Ganaderos.

Cree el Ministro que suscribe que la reforma que tiene la honra de someter á la aprobación de V. M. no ha de ofrecer en su ejecución inconveniente de ningún género, y que por el contrario, con ella, sin el menor gravamen para el Tesoro, se facilitará la conservación y defensa de una riqueza nacional de gran cuantía. Dá quizá lugar en que algunas vías sean necesarias por la transformación en estante de la ganadería trashumante; pero por eso debe atender el Gobierno con menos solicitud á conservarlas en la época actual, toda vez que siendo bienes de dominio del Estado, si aquel caso llega, su enajenación puede representar un ingreso de considerable importancia.

En virtud de las consideraciones expuestas, y conformándose en lo fundamental con el parecer del Consejo superior de Agricultura, Industria y Comercio, el Ministro que suscribe tiene la honra de someter á la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de decreto.

Madrid 6 de Agosto de 1892.—Señora —A. L. R. P. de V. M. Aureliano Linares Rivas.

REAL DECRETO

Conformándome con lo propuesto por el Ministro de Fomento;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Forma la Cabaña española todo ganado criado ó recriado en la Península de las cinco especies siguientes: lanar, caballar, vacuno, cabrio y de cerda, cualquiera que sea su raza y sin distinción de estante, trashumante y trashumante.

Art. 2.º La Asociación general de Ganaderos se compone de todos los del Reino, cualesquiera que sean las especies de ganado que crían y el sistema de pastoreo que sigan.

Art. 3.º La Asociación tiene por objeto defender los derechos colectivos de la ganadería y cuidar de que sean fielmente observadas las leyes y disposiciones gubernativas concernientes:

1.º A la conservación y amojona-

miento de los caminos pastoriles, de los descansaderos y abrevaderos.

2.º A la sanidad de los ganados.

3.º A la extinción de animales dañinos.

4.º A la importación del ganado extranjero y exportación del indigena.

5.º A los tributos de diversas clases impuestos á la ganadería.

6.º A las dificultades que se oponen al aprovechamiento de los pastos pertenecientes por títulos legítimos á los ganaderos.

7.º A la protección especial debida á los rebaños que están en camino.

Art. 4.º La Asociación general de Ganaderos tiene carácter administrativo, por versar su acción sobre asuntos de interés público y sobre fincas de propiedad del Estado. En sus gestiones obran siempre como delegada del Gobierno, y muy especialmente al dirigirse á las Autoridades y á los Jefes de Administración, reclamando su auxilio en favor de los derechos é intereses de la clase, y es representante de ésta en las contiendas que acerca de unos y otros se susciten con los particulares.

Art. 5.º Todos los ganaderos tienen derecho á disfrutar los beneficios de la Asociación, sin preferencias ni privilegios, y por los servicios que la misma presta á la clase y al Estado, están obligados á su sostenimiento en la forma que determina el artículo siguiente.

Art. 6.º La Asociación general de Ganaderos del Reino cuenta para cubrir las atenciones de los servicios propios de su instituto con los recursos siguientes:

1.º El valor de las reses mostrencas.

2.º La tercera parte de las multas impuestas á los ganaderos por infracción de las leyes de policía pecuaria y á los roturadores de las vías pastoriles.

3.º El producto de sus fincas.

Art. 7.º En sustitución de los valores á que se refieren los números 1.º y 2.º del artículo anterior, la Asociación podrá celebrar conciertos con las Juntas locales de ganaderos ó con los Ayuntamientos, á razón de 5 pesetas anuales por millar de reses lanares ó su equivalencia en las demás especies, según la proporción siguiente:

Una cabeza de ganado caballar por ocho de lanar ó cabrio.

Una idem de id. vacuno por seis idem id.

Una idem de id. cerda por dos id. id.

Art. 8.º Corresponde al Estado la décima parte de todo lo que la Asociación recaude por los conceptos 1.º y 2.º del art. 6.º, ó por el 7.º, cuyo importe deberá ingresar trimestralmente en el Tesoro, dando cuenta al Ministerio de Fomento de la fecha en que lo verifique y de la suma que representen las cantidades ingresadas. La Asociación dispone libremente de las nueve décimas partes restantes, tanto para administrárselas como para invertirías.

Art. 9.º La Asociación general de Ganaderos se compone para el servicio de la clase:

1.º De las Juntas generales.

2.º De un Presidente nombrado por el Gobierno á propuesta en terna por dichas Juntas.

3.º De una Comisión permanente.

4.º De una oficina central.

5.º De Visitadores provinciales, de partido, municipales, permanentes y extraordinarios.

Art. 10. Los ganaderos quedan facultados para constituirse en Junta municipal, regional ó provincial, y el Presidente de la Corporación puede promover la constitución de estas Juntas donde lo estime conveniente para representar de un modo permanente á la Asociación, ó para tratar de alguno ó algunos asuntos especiales.

Art. 11. El Presidente de la Asociación

acion es individuo nato del Consejo superior de Agricultura; los Visitadores provinciales lo son de las Juntas provinciales de Agricultura, y los Visitadores municipales de las de Sanidad de los pueblos.

Art. 12. Las vías pecuarias necesarias para la conservación de la Cabaña española y el tráfico de rees son: cañadas, cordeles, veredas, coladas, abrevaderos, descansaderos y los pasos. La anchura de las cañadas es de 75, 23 metros (90 varas castellanas); la de los cordeles 37, 61 metros (45 varas); la de las veredas es de 20, 89 metros (25 varas); la de las coladas así como la extensión de los abrevaderos, es indeterminada; los pasos son las servidumbres que tienen algunas fincas, para que por ellas, levantados los frutos, puedan cruzar los ganados.

Art. 13. Las vías pecuarias, los abrevaderos y los descansaderos de la ganadería son bienes de dominio público, y son imprescriptibles, sin que en ningún caso puedan legitimarse las roturaciones hechas en ellos.

En el caso de existir plantaciones ó edificaciones de larga fecha dentro del perímetro de una vía pecuaria ó descansadero, la Asociación, sin perjuicio de las facultades é iniciativas que á la Administración corresponden para la defensa y reivindicación de los derechos que al Estado pertenecían, instruirá el oportuno expediente, á fin de proveer, de acuerdo con el ocupante de buena fe, al servicio de la ganadería, debiendo elevarlo, una vez terminado, al Ministerio de Fomento para la resolución que proceda.

Art. 14. Las vías pecuarias y los abrevaderos y descansaderos estarán bajo la vigilancia de la Administración y la inmediata de los delegados de la Asociación general de Ganaderos, de los guardas municipales y de la Guardia civil. Esta prestará especial protección á los pastores en sus marchas con los ganados.

Art. 15. La Asociación general de Ganaderos, como representante de la Administración, está obligada á reivindicar para uso de la Cabaña española las vías pecuarias, los abrevaderos y descansaderos en todo ó parte usurpados, ejercitando al efecto ante los Tribunales y Autoridades correspondientes las acciones que competen al Estado respecto á los bienes de dominio público. De todo litigio que para ello promueva deberá dar cuenta inmediata al Ministerio de Fomento.

Art. 16. Queda á cargo del Cuerpo de Ingenieros de Montes la conservación y mejora del arbolado de las vías pecuarias en los montes públicos. Los pastores, al transitar por ellas, tienen el derecho del aprovechamiento de las leñas secas y rodadas para el hogar, y de cortar las estacas que necesiten para fijar las redes.

Los Jefes de los distritos forestales incluirán en los planes anuales de aprovechamiento respectivo el arbolado de dichas vías, conciliando el beneficio con las obligaciones arriba indicadas que tienen que cubrir, á cuyo efecto, y en armonía con lo dispuesto en el art. 87 del reglamento de 17 de Mayo de 1885, dictado para el cumplimiento de la ley de 24 de Mayo de 1863, la Asociación general de Ganaderos, por sí, ó por medio de sus Visitadores, dirigirá á los Jefes indicados, dentro del primer trimestre de cada año natural, notas exactas de las necesidades especiales que el referido arbolado haya de satisfacer en cada caso, para que sean atendidas en el plan respectivo.

Art. 17. Cuando para construir un ferrocarril ó una carretera fuese preciso ocupar parte de una vía pecuaria, se facilitará el paso de los rebaños con fuentes ó pasos á nivel. Si la línea férrea ó la carretera que se ha de cons-

truir siguiese la misma dirección que la vía pecuaria, se adquirirá de los terrenos limítrofes lo necesario para agregarlo á la misma, á fin de que no quede interrumpido el tránsito de los rebaños.

La Asociación hará las reclamaciones oportunas si no se observasen en los trazados las reglas establecidas sobre la materia.

Art. 18. Cuando los dueños de los rebaños residentes en terrenos fronterizos tuviesen motivo de queja ó razón para reclamar contra ganaderos ó Autoridades extranjeras, la Asociación se dirigirá al Gobierno á fin de que procure del modo que juzgue oportuno, se cumplan los Tratados vigentes.

Art. 19. Si se promoviese cuestión ó se suscitasen dudas entre los aduaneros y los dueños de los rebaños que pastan dentro de la zona fiscal sobre la aplicación de las órdenes expedidas para evitar el contrabando, el Visitador de la localidad podrá acudir en defensa de los ganaderos siempre que la razón esté de parte de éstos.

Art. 20. Cuando ocurriese deuda sobre la aplicación de algún artículo arancelario, bien por no conocerse el estado de la lana, bien por no estar claramente definida la especie ó raza del ganado, ó sobre clasificación y adeudo del producto pecuario, la Asociación instruirá el oportuno expediente con objeto de que se expidan por la Administración las órdenes aclaratorias necesarias.

Art. 21. La Asociación tiene el deber de contestar á las consultas que se dirijan sobre asuntos pecuarios, siendo de su cuenta los gastos que originen los estudios, ensayos y pruebas que haga con tal motivo.

Art. 22. La Presidencia se podrá dirigir al Ministerio de Fomento solicitando noticias y datos sobre razas y precios de ganados, sobre sistemas de alimentación y sobre los resultados de ciertas reformas.

Art. 23. Un reglamento especial de pondrá lo conveniente para la acertada aplicación de este decreto, y además la Asociación general de Ganaderos redactará los necesarios para el buen orden interior y el pronto despacho de los expedientes.

Dado en San Sebastian á trece de Agosto de mil ochocientos noventa y dos.—María Cristina.—El Ministro de Fomento, Aureliano Linares Rivas.

REAL DECRETO

Conformándome con lo propuesto por el Ministro de Fomento;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en aprobar el adjunto reglamento para la ejecución del Real decreto de esta fecha reorganizando la Asociación general de Ganaderos del Reino.

Dado en San Sebastian á trece de Agosto de mil ochocientos noventa y dos.—María Cristina.—El Ministro de Fomento, Aureliano Linares Rivas.

REGLAMENTO

PARA LA EJECUCION DEL REAL DECRETO DE ESTA FECHA REORGANIZANDO LA ASOCIACION GENERAL DE GANADEROS

TITULO PRIMERO

DE LA ASOCIACION GENERAL DE GANADEROS

CAPITULO PRIMERO

De la corporacion en general

Artículo 1.º La Asociación general de Ganaderos está obligada á prestar su apoyo á la clase dentro de los límites marcados en el Real decreto de esta fecha.

Art. 2.º Los ganaderos que celebren conciertos con la Asociación, no

podrán eludir el pago de las cuotas con que deben contribuir á la misma, según los artículos 6.º y 7.º del Real decreto de esta fecha, á pretexto de ser ineficaz su acción protectora para el fomento de la ganadería.

Art. 3.º La Asociación podrá recurrir directamente á los Centros administrativos, á las Corporaciones científicas, á los Ministerios y á las Cortes, cuando lo crea conveniente, para realizar los fines de su institución, y debe solicitar el apoyo del Ministerio de Fomento siempre que sea necesario para defender los derechos é intereses de la ganadería.

Art. 4.º La Asociación dará cuenta al Ministerio de Fomento de todas las disposiciones de carácter general que adopte en uso de sus atribuciones.

(Continuará)

ANUNCIOS OFICIALES

HOSPITAL PROVINCIAL

Estado que se publica en virtud de la circular del señor Gobernador inserta en el *Boletín* de 6 de Junio de 1892, y la cual deben tener muy presente los señores Alcaldes y Secretarios, para evitar responsabilidades.

ESTABLECIMIENTOS DE BENEFICENCIA DE ORENSE

AÑO ECONÓMICO DE 1892-93

Mes de Octubre

Estado demostrativo de los enfermos civiles de caridad existentes en el Hospital el día de la fecha, con expresión del número de vacantes que existen en virtud de lo acordado por la Comisión provincial en sesión de 15 de Marzo último.

Número de camas disponibles, según el acuerdo.	74
Idem de enfermos de caridad hasta el día.	64

Vacantes que existen. 10
Orense 12 de Octubre de 1892.—
El Director, Narciso Serantes.

AYUNTAMIENTOS

BARCO DE VALDEORRAS

Don Augusto Trincado, Alcalde presidente del Ayuntamiento de Barco.

Hago saber: Que la recaudación de las cuotas de contribución territorial é industrial, de este término municipal correspondientes al actual año económico de 1892 á 93, tendrá lugar en el término de ocho días á contar desde el 14 del actual; haciendo saber á los contribuyentes que podrán satisfacer sus cuotas sin los recargos durante los diez primeros días del mes siguiente.

Barco de Valdeorras, Octubre 10 de 1892.—Augusto Trincado.

RUBIANA

Por término de ocho días hábiles contados desde el en que aparezca inserto en el *Boletín oficial* de la provincia el presente edicto, se hallará expuesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento el reparto ó distribución del encabezamiento forzoso de líquidos y alcoholes, confeccionado por los representantes de los gremios para el actual ejercicio económico.

Lo que se anuncia para conocimiento de los interesados.

Rubiana y Octubre 10 de 1892.—Gerardo Alonso.

LEIRO

Habiendo dado parte á esta Alcaldía de mi cargo Josefá Borrero, vecina del pueblo de Oseve, en éste término municipal, que el día 3 del corriente y hora siete de su mañana, desapareció

del hogar doméstico su hermana política Clotilde Gonzalez Miguez, natural y vecina también del mencionado Oseve, de la parroquia de Lebosende, la que vivía en compañía de la denunciante y cuyas señas á continuación se expresan; ruego por tanto á todas las autoridades así civiles como judiciales procedan á la busca y captura de la mencionada Clotilde y caso que sea habida la pongan á mi disposición para yo entregarla á su hermana política que la reclama.

Alcaldía de Leiro Octubre 3 de 1892.—El Alcalde, Manuel Feijóo.

Señas personales de Clotilde Gonzalez

Color moreno.
Cara redonda.
Pelo y ojos castaño oscuros.
Cejas y pestañas al pelo.
Boca regular.
Nariz idem.
Edad de 34 años.
Estado soltera.
Estatura corta y gruesa.
Viste saya de tartan usada y oscura.
Delantal con listis blancas.
Pañuelo de algodón al cuello.
Otro á la cabeza de algodón pajizo á cuadros.
Saló descalza.

Señas particulares

Es tartamuda.

ANUNCIOS

PÉRDIDA

Habiéndose extraviado el día 7 del corriente, ó sea el día de feria en esta ciudad, una vaca con cria cuyas señas son: edad y cuerpo regulares, color castaño, y la cria de unos dos meses á tres bastante desarrollada, color castaño.

Se ruega á la persona ó personas en cuyo poder se encuentre dicha vaca con su cria, lo participen á Antonio Vazquez y Tesouro, vecino de Golpellás en el Ayuntamiento de Paderne, el cual satisfará los gastos de manutención y demás que ocasionase.

A LOS ENFERMOS DE LOS OJOS



Llegó el renombrado especialista en las enfermedades de la vista don

M. Marban. Tiene su Clínica Oftalmológica en la calle de Hernán Cortés, número 7.

Horas de consulta, desde las diez de la mañana en adelante.

Coloca y vende ojos artificiales.
NOTA. En la primera visita serán desengañados los que no tengan remedio.—5

VENTA

A voluntad de su dueño se vende la mitad de la casa señalada con el número 33, en la calle de Santo Domingo de esta ciudad, con su pátio ó resío; dará razón el Procurador Berjano.—14